

Autogestión y cooperativismo en México

Control obrero y resistencias contra la crisis económica global
y las contrarreformas neoliberales

*Patrick Gun Cuninghame**

RESUMEN

Este artículo está situado en México, donde –con la excepción del movimiento zapatista– la izquierda, en general, es mucho más débil que en América del Sur, y el movimiento obrero siempre ha sido un socio menor de los más numerosos movimientos campesinos. Sobre todo, ha sido el objetivo principal en casi un siglo de represión, coerción, corrupción, cooptación y el corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, se han dado importantes luchas en el pasado reciente en los temas de control de la autogestión y los trabajadores, que merecen ser recordadas y que destaco aquí como una parte importante de la experiencia latinoamericana.

PALABRAS CLAVE: autogestión, cooperativismo, México, control obrero, resistencia, crisis económica global, contrarreformas neoliberales.

ABSTRACT

This chapter will be on Mexico, where with the exception of the Zapatista movement, the Left in general is much weaker than in South America, the workers movement has always been a junior partner of the more numerous but more conservative peasants movements and of course it has been the prime objective of almost a century of PRI repression, coercion, corruption, co-optation and corporatism. Nevertheless, there have been important struggles in the recent past on the issues of self-management and workers control, which deserve to be remembered and highlighted as an important part of the Latin American experience.

KEY WORDS: self-management, co-operativism, Mexico, workers' control, resistance, global economic crisis, neoliberal counter-reforms.

* Profesor-investigador, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco [pcuninghame@hotmail.com].

La autogestión ha sido un aspecto controvertido del movimiento obrero internacional desde principios del siglo XIX, cuando Robert Owen y Charles Fourier dieron forma a los movimientos cooperativos en Escocia y Francia, respectivamente. Pronto, Marx y Engels criticaron el cooperativismo y su práctica de la autogestión obrera como parte del “socialismo utópico”, que, según ellos, deseaba coexistir pacíficamente con el capitalismo, solamente rompiendo con él paulatinamente, en lugar de aceptar el desafío y la urgencia de un cambio revolucionario violento y, sobre todo, la necesidad de la destrucción política del capitalismo, como dejaron claro en el *Manifiesto del Partido Comunista*, de 1848. Estas críticas continúan hoy, cuando en la mayor parte del mundo los movimientos cooperativos hace tiempo han sido recuperados y reintegrados por el capitalismo, incluso con un papel a menudo de liderazgo en el cambio hacia el paradigma posfordista-neoliberal, como en el caso de la Tercera Italia (Bagnasco, 1977).

El argumento de que la autogestión era poco más que una forma de autoexplotación de trabajadores por parte de trabajadores, parecía haber ganado terreno hasta la ocupación de los centros sociales autogestionados, a cargo de movimientos autonomistas en Italia, Alemania y España, en las décadas de 1980 y 1990, cuando demostraron que todavía tenían una connotación claramente anticapitalista, por lo menos en ciertas circunstancias. En realidad, muchos fueron reprimidos, se agotaron o, en algunos casos, se han convertido en empresas comerciales exitosas, como el Centro Sociale Leoncavallo, en Milán, Italia (Katsiaficas, 1997).

Lo que ha dado quizá una mayor credibilidad a la renovación de estas prácticas han sido los acontecimientos más recientes en América Latina, en particular la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, el 1 de enero de 1994, contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), uno de los pilares del neoliberalismo global y la sentencia de muerte para la soberanía nacional y los estándares de vida dignos para la mayoría de los mexicanos.

Desde entonces, los zapatistas (o neozapatistas, ya que el primer movimiento hizo parte de la Revolución Mexicana hace más de un siglo, dirigido por un líder campesino radical: Emiliano Zapata) han avanzado, a pesar de la represión y la guerra contrarrevolucionaria

de baja intensidad permanente por parte del Estado mexicano y sus sostenedores en Estados Unidos y la Unión Europea, hasta el punto en que, no solamente autogestionan cooperativas rurales y de fabricación como el pilar de su intentado modelo económico poscapitalista, sino que, sobre todo, se autogobiernan de una manera democrática directa a partir de las juntas de buen gobierno (JBG) y los Caracoles (zonas administrativas más grandes que las JBG), creadas en 2003 luego de que el gobierno mexicano renegara de los Acuerdos de San Andrés, de 1996, sobre la autonomía indígena.

Sin embargo, este ejemplo completo de autogestión tiende a confirmar la tesis de los que critican la autogestión puramente económica como más útil para el capitalismo que para el anticapitalismo (Baronnet *et al.*, 2011; Wright, 2002).

La segunda iniciativa latinoamericana ha sido el movimiento de fábricas y empresas recuperadas en Argentina desde la revolución de diciembre de 2001, cuando las políticas neoliberales llevaron el país a un estado de colapso económico y político, con el cierre de cientos de empresas y el cese de sus trabajadores. Muchos de ellos, despedidos del sector industrial y de los servicios, se negaron a ser victimizados una vez más y enviados a casa sin un centavo, y ocuparon las empresas, exigiendo que los dueños volvieran a abrirlas. Una vez que se hizo evidente que los capitalistas no tenían ninguna intención de reabrir las, los obreros tomaron la alternativa de autogestionar sus lugares de trabajo como cooperativas y así tratar de defender sus ingresos y la actividad productiva, incluso como parte de una economía todavía capitalista, con la explotación y la alienación que eso implica.

A menudo, estas empresas recuperadas estaban en el centro de las iniciativas de las comunidades proletarias, las cuales exigieron que los trabajadores las mantuvieran abiertas para evitar el empobrecimiento y colapso socioeconómico de esas comunidades. Hoy, trece años después, más de 300 (ocupadas y autogestionadas), muchas de ellas fábricas industriales, se mantienen en actividad, funcionando como cooperativas bajo el control obrero. A pesar de que Argentina fue un bastión del neoliberalismo bajo el régimen de Carlos Menem, en las décadas de 1980 y 1990, en la actualidad tiene un gobierno antineoliberal, por lo menos retóricamente, en Cristina Fernández, quien apoya, en los planos regional e internacional, los gobiernos latinoamericanos más radicales (Venezuela, Bolivia

y Ecuador), donde las cooperativas autogestionadas son centrales para los intentos, sobre todo desde la base, de hacer posible otro mundo y construir una economía posneoliberal, incluso en medio de la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión, en la década de 1930.

MÉXICO 2012-2014: CONTRARREFORMAS NEOLIBERALES Y RESISTENCIA SOCIAL

Después de haber dibujado brevemente algunas de las cuestiones claves acerca de la autogestión y del cooperativismo como formas de control obrero, se presenta un análisis actualizado de la situación de las resistencias sociales contra la ofensiva neoliberal antiobrera del primer año del gobierno “pactista” de Enrique Peña Nieto, cuyo programa de reformas ha sido apoyado por los otros dos partidos políticos principales de la coalición del Pacto por México, aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRD), nominalmente del centro-izquierda, se retiró “en protesta” (tibia y tardía) contra la reforma energética diseñada para privatizar parcialmente Pemex, la compañía petrolera estatal nacionalizada en 1938 y uno de los últimos vestigios de la Revolución Mexicana de 1910-1938. Sin embargo, Enrique Peña Nieto ha seguido acercándose lo más posible al gobierno pactista en cada oportunidad, sea en el Congreso o en su relación política cada vez más estrecha con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, un político situado en el ala derecha pro neoliberal del PRD, como los “Chuchos” (seguidores de Jesús Ortega), que lo controlan.

Esta ofensiva neoliberal ha incluido hasta ahora dos contrarreformas laborales. La primera fue la Ley Federal del Trabajo, a finales de 2012, el primer acto del gobierno pactista, que se centró, entre varias iniciativas, en legalizar la externalización subcontractual, en un intento de reformular (dado el vacío fiscal dejado por la venta parcial de Pemex) el sector informal, más grande ahora que el formal, dado que los sectores sociales nacionales y extranjeros más ricos pagan pocos impuestos y esquivan el castigo por evasión fiscal mediante la inversión en el sector informal de la economía. Así, éste ha podido superar al sector formal, tanto en tamaño como en su capacidad para generar ingresos y nuevos puestos de trabajo, aunque no desarrollo económico en su sentido clásico.

La segunda contrarreforma neoliberal del trabajo fue disfrazada como Ley de Reforma Educativa, septiembre de 2013, que ataca directamente al sector del empleo más grande de México y de América Latina, los más de un millón de maestros y maestras de la educación básica, entre los peor pagados en el país, que, en efecto, los reduce a trabajadores de segunda clase con aún menos derechos que los que siguen protegidos por la reformada Ley Federal del Trabajo de 2012. Ahora están obligados a soportar el control y seguimiento permanente por el nuevo organismo federal de supervisión educativa, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con la amenaza constante para los más jóvenes del despido sumario y para los más experimentados de ser reducidos a la condición de burócratas y de perder sus derechos por el número de años de servicio para la jubilación.

Esta reforma representa la copia fiel y acrítica de la propuesta educativa del Banco Mundial y de una semejante en Estados Unidos, que llevó al cierre de más de 50 escuelas públicas privatizadas en Chicago, en 2013. No obstante, este ataque de privatización y de precarización contra los profesores de la educación básica ha provocado uno de los movimientos más importantes de resistencia obrera en la historia reciente, organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una tendencia disidente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1979.

La Coordinadora organizó una huelga general que afectó a casi todas las entidades federativas, incluyendo algunas donde es históricamente débil, como el Estado de México, el más poblado y siempre gobernado por el PRI, donde los maestros del sindicato blanco SNTE han roto con la colaboración de clases y la corrupción de sus líderes. Ahora apoyan las iniciativas de la CNTE contra la "reforma educativa" de 2013. Sus acciones de protesta han incluido la ocupación de dos importantes plazas de la Ciudad de México por más de seis meses y la organización diaria de marchas, plantones y mítines ante las secretarías del gobierno federal, con el apoyo de estudiantes universitarios y de secundaria y preparatoria. Se han sumado también los 16 000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), despedidos de manera sumaria en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón.

Estas acciones directas paralizaron con frecuencia la actividad económica y el movimiento del transporte en el centro de la ciudad. Sin embargo, tras un año largo de lucha sin tregua, miles de profesores, especialmente maestras, que constituyen la mayoría de las dos agrupaciones magisteriales, pareciera que tampoco han logrado alcanzar su objetivo de derogar la reforma educativa, especialmente porque la CNTE ha sido abandonada por los llamados sindicatos “independientes”, los cuales en realidad se acercan al PRD, que ahora trabaja en estrecha colaboración con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional.

La lucha de la CNTE, basada en la acción directa, ha sido hasta ahora la respuesta más sustancial contra las reformas neoliberales, aunque se han suscitado otras huelgas contra los efectos negativos de la nueva Ley Federal del Trabajo, en especial por los trabajadores de la empresa transnacional Honda, fabricante de automóviles, una industria que es cada vez más importante en la economía formal, quienes querían formar su propio sindicato independiente y dejar de ser parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sección sindical corporativista del PRI. Está claro que las diversas reformas neoliberales de 2013 representan un intento por parte de la oligarquía mexicana para pasar la factura de la crisis económica mundial a los sectores más vulnerables de la clase obrera y del campesinado, en el nombre de una mal definida “competitividad”; es decir, que los trabajadores mexicanos sean incluso aún más baratos para contratar, pero, cada vez más, su trabajo es más especializado y cualificado, como los muchos graduados universitarios con maestrías, para hacer que la economía sea más desarrollada técnicamente e integrada globalmente para ser atractiva a los inversionistas y especuladores nacionales pero, sobre todo, a los internacionales.

A pesar de esta precaria situación, tanto del movimiento obrero mexicano como de la izquierda institucional y extra-institucional en México, ahora me centraré en los intentos por parte de los movimientos sociales de las clases trabajadoras urbanas y rurales para proteger su actividad productiva y sus ingresos de la destitución o de su reconversión de lo formal a empleos informales y precarios, como parte de la tendencia actual en todo el mundo

hacia la precarización del trabajo frente a la prolongación de la crisis económica global de 2007.

México ocupa un lugar importante en la historia latinoamericana del movimiento de las fábricas y empresas recuperadas, en particular en los casos de la refresquera Pascual Boing, en la década de 1980, y de Euzkadi, empresa productora de neumáticos, cuyos trabajadores iniciaron, en los primeros años de este siglo, una de las luchas más importantes en defensa del empleo en México, pero, sobre todo, para el avance de la lucha por el poder y autonomía obrera, y contra el poder del capital.

**EUZKADI-TRADOC: 1 100 DÍAS DE RESISTENCIA
PARA RECUPERAR UNA FÁBRICA**

La cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc), en el estado de Jalisco, representa un importante vehículo en la lucha por los derechos laborales y el avance del poder obrero. Los trabajadores de Euzkadi tuvieron que pasar más de 1 100 días de lucha, entre 2001 y 2005, antes de que pudieran recuperar el control de la empresa de su anterior propietario, la empresa trasnacional alemana Continental Tires, para convertirla en una cooperativa, con todos los beneficios y problemas, ya discutidos, de la competencia dentro de los mercados capitalistas y de la tendencia a la autoexplotación.

En 1931, la empresa fue establecida en El Salto, Jalisco, por un empresario vasco; Euzkadi significa "patria vasca". Siempre fue una empresa de origen extranjero, y se convirtió en un gran atractivo para Carlos Slim, que quería entrar en el mercado de neumáticos más grande del mundo al otro lado de la frontera. Finalmente, la compró, junto con una empresa de neumáticos de San Luis Potosí, que llevó su cuota a casi el 40% de la producción nacional de neumáticos (*Enlace Socialista*, 2007). En 1998, el consorcio alemán Continental, el cuarto mayor productor de neumáticos del mundo y muy interesado en penetrar en el mercado de América del Norte, adquirió el 82 por ciento de sus acciones.

Un año más tarde, las condiciones de trabajo cambiaron drásticamente debido a que 16 trabajadores, que habían sido líderes

sindicales, fueron despedidos sumariamente. En 2001, Continental intentó reformar el contrato colectivo de trabajo contra los intereses de los trabajadores, incluyendo la prolongación de la jornada laboral de ocho a 12 horas, en violación de la Ley Federal del Trabajo. Continental había dejado claro que, si no se llegaba a un acuerdo, habría sanciones y despidos. En aquella época, otros productores de neumáticos, como Goodyear y Michelin, se vieron obligados a cerrar fábricas y eliminar cientos de empleos.

Dos días después del cierre de la planta en Jalisco, el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi (SNRTE) convocó a una asamblea general en la que se decidió por unanimidad a favor de luchar contra el cierre. Debido a la oposición de los trabajadores a los cambios en su contrato colectivo, el 17 de diciembre de 2001, la compañía hullera optó por despedir 1 114 trabajadores. El conflicto incluyó amenazas de muerte e intentos de corromper a los dirigentes de la huelga y de la ocupación de la fábrica, así como problemas financieros y divorcios para los huelguistas.

Como dirigente sindical, primero, y luego presidente del consejo de administración de Tradoc y de la sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, cuya junta está formada por los mismos trabajadores, quienes también son dueños de la mayoría de las acciones de capital de la compañía, Jesús Torres Nuño ha declarado:

Como todos sabemos, en México las luchas sindicales siempre terminan con disparos o dinero para el dirigente sindical, porque en cuestiones legales, el secretario general tiene un poder ilimitado, y su firma puede decidir qué va a pasar a cientos o miles de los trabajadores representados. En este caso, Continental me ofreció un millón de dólares para vender el conflicto, pero no acepté, porque todavía tenemos principios con los cuales se nos había criado. Pero también, esto no ocurrió debido a la forma en que nos organizamos como sindicato. El nuestro es un sindicato y la toma democrática de decisiones siempre venía desde el fondo hacia arriba en la asamblea general, que era la máxima autoridad dentro del sindicato [...] Es una batalla que debe inspirar a los trabajadores en todas partes [...] Sí, incluso los de Europa (*Enlace Socialista*, 2007).

No fue sino hasta que 624 trabajadores (de 941 que iniciaron la huelga en 2001) lograron internacionalizar su lucha, posiblemente

influidos por la huelga en 1997 de los estibadores de Liverpool (Munck, 2006), que fueron capaces de poner presión real sobre Continental para obligarlos a volver a la mesa de negociaciones.

Decidieron llevar la lucha hasta la sede de Continental en Hannover, Alemania, y hablar en la junta general de accionistas. Con credenciales otorgadas a ellos por unos accionistas críticos que renunciaron a sus puestos en la junta general, los trabajadores delegados se presentaron ante los ejecutivos y otros accionistas de la empresa para denunciar la violación de sus derechos laborales en México. El 18 de febrero de 2004, la huelga y ocupación fueron reconocidas por los tribunales mexicanos, una decisión que dio mayor certidumbre no solamente a los trabajadores de Euzkadi, sino que también se convirtió en un precedente para otros movimientos sindicales.

El costo del conflicto, de tres años, fue alto: cinco trabajadores murieron y al menos a otros cuatro, a quienes se les negó atención médica adecuada, no les fueron reconocidos sus beneficios por el gobierno panista de Vicente Fox (ex jefe de Coca Cola en México), quien les negó cualquier tipo de seguridad social. Finalmente, se llegó a un acuerdo en el cual los trabajadores ganaron la mitad de sus salarios atrasados, lo que les permitió reabrir Euzkadi como una cooperativa autogestionada.

El 17 de enero de 2005, Euzkadi reabrió y comenzó a trabajar con la participación del inversionista principal, Llanti Systems, y Tradoc, como copropietaria de la cooperativa. En 2007, estaba produciendo 6 000 neumáticos al día, de los cuales exportaba 10% a Colombia, Honduras y Guatemala, aunque sea prácticamente desconocida en comparación con sus principales competidores, como Michelin, Continental y Firestone, ya que no puede darse el lujo para pagar campañas publicitarias. Euzkadi había sido una marca líder en México, por lo menos en la década de 1980, todavía con un mercado protegido, sin acuerdos de libre comercio que socavaran su solidez y fuerza. El salario semanal de Torres en 2007 no superó los 2 200 pesos:

Tengo que decir con gran orgullo que nuestro sindicato no tiene nada que ver con los sindicatos corporativos tradicionales que solamente buscan dominar y someter a los trabajadores. El nuestro era siempre un sindicato con una gran tradición democrática, independiente, muy

clasista y una organización de apoyo. Esto dio sus frutos en el final de nuestra supervivencia como trabajadores porque cuando estalló el conflicto, recibimos mucha solidaridad. [...] El sindicato decidió rechazar el paquete de enmiendas que Continental había ofrecido bajo el único argumento de que no éramos competitivos a nivel mundial. Quiero decir, no aceptamos este lema que viene empujado por las grandes corporaciones transnacionales, que el trabajo es más barato y más rentable en Asia que en México, donde existe un marco regulatorio que es la Ley Federal del Trabajo, que protege los derechos de los trabajadores y empleados (*Enlace Socialista*, 2007).

Los huelguistas también tuvieron que enfrentar el poder y la ira de los gobiernos federal y estatal, que ejercieron continua presión para que cedieran ante Continental, con la desinformación de que, “gracias” al sindicato, una de las empresas más importantes de México se había cerrado, no sólo en El Salto, sino también su planta en San Luis Potosí, cierres que nunca ocurrieron:

Hemos recibido muchas críticas en su momento, pero sabíamos que estábamos defendiendo no sólo nuestros derechos [...] sino también los derechos de todos los trabajadores, debido a la cuestión del derecho de huelga, que estaban luchando por casi tres años porque nuestro movimiento no fue reconocido legalmente por el gobierno durante ese tiempo, a pesar de que la ley que estipula que tiene que ser dentro de 24 horas (*Enlace Socialista*, 2007).

Los huelguistas de Euzkadi fueron apoyados por muchos sindicatos, especialmente de otras cooperativas, como Pascual Boing:

Gracias a la gran solidaridad de muchas organizaciones, de un montón de gente y sobre todo a nuestras esposas y familias, pudimos resistir durante 1 141 días sin recibir ningún salario, que por supuesto no era agradable, pero hoy en día tenemos una gran recompensa: somos dueños de la fábrica. Y es un trabajo decente, porque ahora somos copropietarios, estamos gestionando nuestra fábrica, se trata de los medios de producción, y así estamos demostrando que los trabajadores no sólo están hechos para manejar algunas máquinas, pero también estamos hechos para manejar los medios de producción y distribución. ¿Por qué no el conjunto de la sociedad también? (*Enlace Socialista*, 2007).

En 2005 había 624 trabajadores, entre personal técnico, administrativo y de producción:

El reinicio del trabajo era muy complicado. Prácticamente, teníamos que empezar desde menos de cero. Piensa cómo encontramos la planta después de tres años de inactividad, sin ningún tipo de mantenimiento [...] Los propios trabajadores ahora se convierten en propietarios, estamos de vuelta para operar estas máquinas, que era muy urgente e inmediata. Hoy en día, estos compañeros tienen salarios y el empleo, tenemos una perspectiva de crecimiento y seguimos cometiendo los mismos neumáticos, porque, naturalmente, nosotros no inventamos nada, pero ahora tenemos una perspectiva de crecimiento importante, creemos que la plantilla se incrementará y por supuesto, también los niveles de producción. En este momento estamos haciendo 6 000 neumáticos al día. Muy lejos de los 12 000 o 14 000 neumáticos que hicimos el día antes del cierre. Puedo decir con orgullo que ya estamos exportando a países como Honduras, Guatemala y Colombia, y muy pronto vamos a venderlos en Estados Unidos (*Enlace Socialista*, 2007).

Un grupo de alemanes llegó en cierta ocasión a ver las instalaciones; entre ellos, Mechthild Dortmund, Jürgen Dietrich y Höper Scharna, de Intersoli/Volkswagen, de Wolfsburg, un historiador y algunos otros trabajadores. Dice Jesús Torres:

La visita de estas personas que vinieron de Alemania fue una de muchas [...] En realidad, hay que reconocer que en los más de tres años [de la huelga], hemos recibido mucha solidaridad de organizaciones y personas en Europa. Esto es impresionante para un sindicato como el nuestro, que estaba en huelga sin recursos y en una situación económica precaria [...] Entramos en las entrañas de la sociedad, en Hannover, Alemania, y nos enfrentamos al presidente [de Continental], Manfred Wennemer, a quien estoy seguro, le duele mucho tener que admitir la derrota en México, no por dinero, sino por lo que significa para todos sus trabajadores en todo el mundo, en más de 20 plantas de producción (*Enlace Socialista*, 2007).

El éxito también se logró gracias a la solidaridad de muchas organizaciones y a los accionistas críticos que dieron a los huelguistas sus credenciales para que pudiéramos entrar y utilizar su propia voz. Se convirtieron en accionistas por un día, una vez al año, durante los tres años de su lucha:

Todo esto hizo que los trabajadores alemanes y austriacos, y muchas personas que estaban viendo nuestro esquema como un ejemplo a seguir, nos invitaran a muchos lugares. El año pasado [2006], nuestra organización recibió el primer premio en el Foro Económico Social Alternativo de Davos, en Suiza. Es la primera vez, porque de lo contrario siempre están señalando los aspectos negativos, como violaciones de los derechos de los empleados de empresas como Coca-Cola o las empresas que violen las normas ambientales. En este caso, el primer premio internacional fue para nosotros lo cual es una fuente de gran orgullo (*Enlace Socialista*, 2007).

Hoy esta lucha es vista como un ejemplo exitoso de reivindicación de los derechos laborales. Desde 2001, la cooperativa casi ha duplicado su membresía al pasar de 587 trabajadores durante el movimiento de resistencia, a mil en la actualidad. Tradoc opera actualmente en asociación con la empresa estadounidense Cooper Tires y, según cifras de 2011, se fabrican cerca de 13 millones de neumáticos cada año, de los cuales 70% se exportan al mercado estadounidense; representa un símbolo internacionalmente reconocido por muchos movimientos de mano de obra, aunque es uno reformista que no pone en peligro las relaciones de trabajo capitalistas o desafía a la industria del automóvil altamente contaminante.

Como nota final, la Cooperativa Tradoc también es miembro de la red de cooperación del G-50, que organiza y se expresa a través de la página web "Coperacha".¹

PASCUAL BOING

Pascual Boing es una planta productora de bebidas gaseosas, cuyos productos más conocidos se encuentran bajo los nombres de Pascual, Boing! y Lulú. Comenzó en 1940 y con éxito celebró su propia entrada al mercado mexicano a pesar de los competidores internacionales. Sin embargo, diversos conflictos laborales llevaron a una huelga en 1982, que terminó en 1985 con los trabajadores celebrando la obtención del derecho a hacerse cargo de la empresa

¹ [www.lacoperacha.org.mx].

y administrarla como una cooperativa. Desde entonces, se le ha mantenido como un negocio rentable a pesar de que ha perdido cuota en el mercado en México, por la competencia de Coca Cola y Pepsi, lo que ha llevado a la empresa a protestar contra las prácticas desleales que la excluyen de lugares de venta, así como para buscar en el extranjero nuevos mercados, especialmente en Estados Unidos, según datos de 2007 de la Sociedad Cooperativa "Trabajadores de Pascual".

La empresa, fundada en 1940 por Rafael Víctor Jiménez Zamudio, fue originalmente privada. En la década de 1960, Jiménez comenzó a utilizar *tetrapacks* y adquirió la planta del Norte de Canada Dry, junto con una franquicia para producir y comercializar productos de esa marca. Desde sus inicios, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo ante las corporaciones multinacionales. En 1980, estaba en el cuarto lugar en el mercado nacional de refrescos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las plantas eran altamente explotadoras, sin pago de horas extras. Ocurrieron varios intentos de organizar a los trabajadores en la planta contra estos abusos, pero la dirección había despedido a los organizadores.

En marzo de 1982, el gobierno federal decretó que todos los trabajadores, incluidos los de las empresas privadas, debían recibir aumentos salariales de 30% debido a la devaluación del peso. Sin embargo, Jiménez se negó a aplicar el incremento, alegando que no podía permitírselo. Los trabajadores se organizaron en protesta, 150 de ellos fueron despedidos por participar, y se declararon en huelga el 18 de mayo de 1982. El 31 de mayo, Jiménez y un grupo de choque del sindicato oficial de la CTM atacaron a los trabajadores en huelga en la planta de la colonia Tránsito. La violencia dejó dos huelguistas asesinados y 17 heridos.

Jiménez fue acusado formalmente de asesinato, pero no fue procesado. El paro se prolongó durante tres años. Los trabajadores tomaron las oficinas federales de arbitraje en señal de protesta, y se formó un comité formal que los representó para obtener el reconocimiento legal y el apoyo público para su causa.

En 1983, los tribunales fallaron a favor de los trabajadores en su litigio contra la compañía, y en 1984 los trabajadores se reunieron con el presidente Miguel de la Madrid. Jiménez declaró la empresa en quiebra y trató de vender las instalaciones. Sin embargo, los trabajadores y las autoridades federales elaboraron un acuerdo

para que los trabajadores se hicieran cargo de toda la compañía, incluyendo las instalaciones y las marcas. La Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL se formó el 27 de mayo de 1985.

Después de años de inactividad, los nuevos copropietarios necesitaban 1.5 millones de dólares para reiniciar operaciones. Durante la huelga, cientos de artistas e intelectuales apoyaron a los trabajadores mediante la donación de obras de arte para subasta. Como el dinero recaudado no fue suficiente, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM proporcionó los fondos necesarios para obtener los permisos y la maquinaria (*Enlace Socialista*, 2007). Aunque hubo luchas internas entre los trabajadores sobre la manera de organizarse y operar la empresa, sus operaciones como una cooperativa comenzaron el 27 de noviembre de 1985. Los trabajadores recibieron su primera participación en las utilidades en mayo de 1986.

El anterior dueño perdió el derecho legal de utilizar el nombre de Pascual Boing, aunque estaba haciéndolo en una planta en Aguascalientes hasta que la cooperativa negoció un acuerdo.

Otro problema era que el terreno en el que se encontraban las plantas no pertenecía a la compañía original, sino más bien a la esposa del dueño, Victoria Valdez, quien demandó a la cooperativa en 1989 y ganó el caso en 2003, cuando la justicia ordenó a Pascual devolver el terreno. El entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, expropió los terrenos de Valdez para devolverlos a Pascual. No obstante, en 2005, el Tribunal Supremo de Justicia declaró ilegal la expropiación, ya que no beneficiaba a la población, sino a una empresa privada que produce un producto no esencial, aunque Pascual Boing no se considera una empresa privada con fines de lucro. Desde su fundación, la cooperativa también ha recibido el apoyo político de intelectuales, estudiantes y alterglobalistas (Poniatowska, 2010).

A pesar de sus problemas, la cooperativa ha crecido, con la apertura de plantas de procesamiento en San Juan del Río, Querétaro, en 1992; Tizayuca, Hidalgo, en 2003, y en Culiacán, Sinaloa, en 2006. No obstante, Pascual ha tenido que desmentir rumores de medios masivos de la derecha en el sentido de que estaba al borde de la quiebra (Notimex, 2003). Hoy, Pascual Boing es la única embotelladora de refrescos de propiedad totalmente mexicana que queda, con más de 5 000 personas empleadas y que genera 22 000

empleos indirectos, demostrando que los trabajadores pueden hacerla funcionar bien.

La organización de la cooperativa consiste en una asamblea general de los fundadores y otros socios, que maneja las juntas de Inversión Corporativa, Administración y la Fundación Cultural. También hay cuatro comisiones: educación, perspectiva social, arbitraje y control técnico. Tiene un fuerte sentido de responsabilidad social y ha sido reconocida como una industria limpia por la Secretaría del Trabajo.

Sin embargo, se debe decir que, como con la lucha Euskadi-Tradoc, la victoria fue sólo parcial, ya que la ley mexicana no permite la incorporación de nuevos cooperativistas. En efecto, los miembros originales de la cooperativa se han convertido en un tipo de élite de gestión relativamente privilegiada, en comparación con los demás trabajadores, que ganan mucho menos. Hay una restricción adicional a la fundación de nuevas cooperativas, ya que algunos se iniciaron con el dinero del pago de salarios atrasados después de un movimiento de huelga. Sin embargo, bajo las leyes mexicanas, en relación con el trabajo, la posibilidad de ejercer esta opción se ha vuelto más limitada. Un claro ejemplo es el artículo 48 de la reformada Ley Federal de Trabajo de 2012, que ahora restringe el pago de salarios atrasados a 12 meses y con solamente un 2% de los salarios caídos por cada año más en huelga.

RUTA 100: UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO AUTOGESTIONADO REPRIMIDA POR EL NEOLIBERALISMO CORRUPTO

La Ruta Urbana del Autotransporte de Pasajeros 100, mejor conocida como Ruta 100 (R-100) o Sistema Metropolitano de Transporte 100 (GTS 100), era un organismo descentralizado, parcialmente controlado por sus trabajadores, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo el control general del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), o Gobierno del Distrito Federal, desde 1997. Operó en la Ciudad de México y municipios cercanos del Estado de México, desde 1981 hasta 1995, cuando fue declarada en quiebra por el gobierno como parte de la privatización del transporte público.

La desaparición paulatina de la R-100 ocasionó graves trastornos en la calidad de la red de transporte público en la capital y en todo el Valle de México. Es quizás el más trágico ejemplo de cómo una mezcla de neoliberalización impuesta a nivel mundial y corrupción local arraigada, junto con artimañas políticas, destruyeron una empresa obrero-controlada que funcionó bien, en detrimento de una de las ciudades más grandes del mundo.

De acuerdo con Jorge Legorreta (2004), experto en transporte público, R-100 “se convirtió en el servicio de autobuses de propiedad estatal más importante y eficiente que la Ciudad de México nunca ha tenido”, una “edad de oro del transporte público, sobre la base de una política social de subsidios plenamente justificados”. Su desaparición, promulgada por el regente capitalino, Óscar Espinosa Villarreal, aceleró el proceso de privatización del transporte público en la ciudad, iniciado por su antecesor, Manuel Camacho Solís, entonces líder del PRI y ahora figura destacada en el Partido de la Revolución Democrática.

La historia de la R-100 comenzó en 1942, cuando se ofreció el servicio de primera clase en la línea de autobuses de Lomas de Chapultepec en el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital de México. En 1958, el DDF se hizo cargo de la línea cuando sus propietarios se encontraron en la insolvencia económica. La nueva línea de estado se caracterizó por su eficiencia y buen servicio.

Mientras tanto, el llamado *Mexico Trucking Alliance* había capturado la mayoría de las rutas que se ejecutan a través de la ciudad, ofreciendo un servicio eficiente: motores en buenas condiciones, operadores bien entrenados, aranceles cada vez más asequibles y una distribución equitativa de las rutas e itinerarios. Esta alianza, conocida como “pulpo camionero”, estuvo principalmente en las manos de Isidoro Rodríguez y Rubén Figueroa, dos líderes urbanos de gran alcance.

En enero de 1981, el entonces regente Carlos Hank González anunció la revocación de las injustas concesiones otorgadas a particulares para el suministro de autobuses de transporte urbano. Una comisión liquidadora procedió a elaborar indemnizaciones conforme a la ley. Dada la situación, el DDF y la *Mexico Trucking Alliance* firmaron un acuerdo para mejorar la calidad del transporte. Los beneficiarios acordaron renovar unidades, racionalizar rutas y proporcionar seguro de viajero. Sin embargo, después de siete

meses, los acuerdos firmados aún no se habían promulgado, por lo que el entonces presidente José López Portillo emitió un decreto de creación de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio, denominado Transporte Urbano de Pasajeros R-100, con la finalidad de prestar servicios en la ciudad y municipios conurbados.

Tras el decreto de López Portillo, Hank González anunció que todos los activos de las 86 empresas de transporte privadas que operaban en la ciudad pasarían a hacer parte del DDF, a través de la R-100. El objetivo era crear un sistema de transporte urbano modelo, tanto en términos administrativos como operativos. En 1985 había mil kilómetros de rutas de servicio y, por lo general, fue reconocido como el sistema de transporte urbano mejor planeado con las tarifas más bajas en el país.

El 3 de mayo de 1989, el Sutauro-100 (sindicato independiente de la R-100, el único que apoyara activa y abiertamente la rebelión del EZLN en 1994) comenzó una huelga para exigir aumentos salariales. Inmediatamente, el DDF activó un plan emergente de transporte con vehículos del Ejército. El sindicato exigía un aumento salarial del 100%, mientras que el gobierno ofrecía en principio 12% y luego 14%, pero el sindicato decidió ir a la huelga.

Un tribunal laboral declaró ilegal la huelga, mientras el ejército y la policía prestaban el servicio de autobuses desactivando la capacidad de los trabajadores para ejercer presión sobre el gobierno. El 6 de mayo se decretó la ocupación inmediata y total de la propiedad del organismo. El 9 de mayo, el sindicato aceptó la oferta de un aumento salarial del 14%. Mientras tanto, el DDF, entonces dirigido por Manuel Camacho Solís, reconoció los espacios de transporte urbano tomados de la R-100 por los minibuses y peseros, que habían empezado a operar en 1987.

Después de esta crisis, tanto administrativa como laboral, se introdujo un programa de modernización que involucró la compra de autobuses y la rehabilitación del resto de la flota. A pesar de este nuevo impulso, los días de la R-100 estaban contados. El 8 de abril de 1995, el DDF, ahora encabezado por Espinoza Villarreal, declaró la quiebra de la R-100, debido a su insolvencia económica y el servicio deficiente. El origen del deterioro financiero de la entidad, como ha dicho Jesús Salazar Toledano, entonces secretario general de Gobierno del DDF, estaba en la "co-administración"

entre Sutura-100 y organismos oficiales (*Reforma*, 1995). A las 1:30 de la mañana de ese sábado, la policía tomó el control de 27 módulos de funcionamiento de la empresa paraestatal, e impidieron la entrada de trabajadores que a las tres de la mañana llegaban listos para empezar su turno. Ese mismo día, Ricardo Barco y otros 11 líderes del Sutura-100 fueron arrestados y acusados de haber desviado nueve millones de pesos del fondo de ahorro de los trabajadores.

El DDF puso en funcionamiento un sistema de transporte de emergencia, dando servicio gratuito en 45 rutas durante diez días, pero eran deficientes e inoperantes. La R-100 había transportado 2.8 millones de usuarios al día en 207 rutas, con 12 098 trabajadores sindicalizados y 1 694 empleados "de confianza". Los procedimientos de quiebra se iniciaron en 1989, después de la huelga.

Seis años después del primer corte de bancarrota, un juez en el Distrito Federal dio el permiso para empezar la desintegración de la paraestatal, cuya responsabilidad recayó en el banco Banobras. Las autoridades de la ciudad ofrecieron a los empleados de la R-100 más de lo que la ley de compensación previó, pero la mayoría de ellos optaron por la movilización masiva para exigir la devolución de su empleo, una situación semejante a la ocurrida con los miembros del SME en octubre de 2009, tras la intempestiva decisión del gobierno de Calderón Hinojosa de cerrar y ocupar militarmente las instalaciones de la paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Después de la presentación de la quiebra en 1995, una serie de misteriosos acontecimientos aún no se han aclarado: el suicidio del entonces secretario de Transporte del Distrito Federal, Luis Miguel Moreno, el 10 de abril; el ametrallamiento, el 18 de junio, de Humberto Priego, el fiscal asignado para el caso contra de los líderes del Sutura-100, y el suicidio, bajo circunstancias muy sospechosas tras un supuesto "pleito de amantes", al día siguiente, del juez a cargo del caso, Abraham Polo Uscanga, que ya había denunciado públicamente las presiones en su contra por parte del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Saturnino Agüero, para renovar las órdenes de arresto contra los representantes sindicales –un caso nunca aclarado públicamente, como tantos otros antes o después.

Cinco años después de la desintegración de la R-100, y los repetidos intentos por licitar el organismo, ahora dividido en 10 empresas, se concedió bancarrota a los antiguos trabajadores paraestatales como parte de las negociaciones para desactivar el conflicto. Ese mismo año, la entonces jefa perredista del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga (actual secretaria de Desarrollo Social del gobierno pactista de Enrique Peña Nieto), decretó que el organismo público descentralizado R-100 había caducado y se había declarado parte del patrimonio del Distrito Federal. Entonces se creó la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, con el objetivo de proporcionar el transporte público radial para los pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito Federal.

Finalmente, de las 10 empresas en que fue subdivida la R-100, sólo ocho están aún en funcionamiento, a pesar de tener corredores creados para proyectos de transporte por carretera y metrobús. Aunque para 1997 la situación política había cambiado cuando la primera elección para jefe del gobierno del Distrito Federal fue ganada por el PRD, la R-100 y la situación del transporte público siguen siendo las mismas; incluso hoy en día ofrece a la población “dispensas” en beneficio de las personas más necesitadas, pero todas pagadas con los impuestos que deberían ser destinados para mejorar la calidad de los servicios e infraestructuras públicas.

El objetivo de la RTP de cubrir las áreas de bajos ingresos no ha permitido la mejora general de la calidad del transporte. La quiebra de la R-100 no sólo dejó un daño irreparable en la conectividad de la zona metropolitana, sino también en áreas urbanas del Estado de México, todavía expuestas a condiciones degradantes y violentas de transporte público debido a que sus autobuses no tienen un esquema que pueda garantizar la seguridad y los tiempos regulares del viaje. A esta deplorable situación hay que añadir el fracaso, tanto de los gobiernos del Distrito Federal como del Estado de México, en elaborar un amplio plan de transporte público y privado, que ha dejado a la ciudad con un retraso que podría tomar décadas restaurar.

COOPERATIVISMO AUTOGESTIONARIO

EN LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS REBELDES ZAPATISTAS DE CHIAPAS

En el estado mexicano de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo han organizado municipios autónomos basados en la antigua costumbre indígena del autogobierno, donde una asamblea de representantes locales conforma la junta de buen gobierno (JBG), no reconocida por los gobiernos estatal ni federal, aunque supervisan los programas gubernamentales sobre alimentos, salud y la educación, así como la recaudación de impuestos, tanto para zapatistas como antizapatistas, estos últimos, en su mayoría, miembros y simpatizantes de los partidos políticos. Por lo tanto, son un claro ejemplo tanto de autogobierno político y autogestión económica colectiva de un sector importante de la clase trabajadora rural.

Durante 2004, el entonces subcomandante Marcos (cuyo nombre actual de batalla es Galeano, desde mayo de 2014, tras el asesinato de un militante zapatista del mismo nombre, en La Realidad, Chiapas, por paramilitares antizapatistas), envió una serie de comunicados a todo el mundo con el fin de informar sobre la creación de las JBG. Éstas tienen la intención de estar en oposición directa al “mal gobierno” (caracterizado, en los comunicados del EZLN, como históricamente capitalista, corrupto, autoritario, oligárquico, violento, coludido con la delincuencia organizada, racista y antiindígena). Hay una JBG, formada por uno o dos delegados, reconvocables y elegidos por los concejos autónomos de entre cuatro y siete de los 27 municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez); en cada uno de los cinco Caracoles (antes llamados Aguascalientes entre 1994 y 2003), y vigilados contra cualquier caída en las prácticas abusivas del “mal gobierno” por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN en las zonas del centro, norte y este de Chiapas bajo su control (o control parcial). Cada JBG actúa de acuerdo con las pautas zapatistas para llevar a cabo sus propias decisiones de manera autónoma. Las JBG no sólo acomodan zapatistas, sino también a sus partidarios o antizapatistas y a sus aliados, especialmente los de la Otra Campaña que ahora se conoce como la Sexta, tanto a nivel nacional como internacional, ya que con la renovación de los comunicados del EZLN en 2013 se

terminó un supuesto largo “periodo de silencio”, pero no por las JBG, cuyos comunicados y denuncias frecuentes simplemente han sido ignorados por los medios masivos racistas y sensacionalistas (Brenner, 2014).

Las JBG también aplican un método de rotación para quienes sirven en ellas. Se requiere que cada hombre o mujer adultos dentro de la jurisdicción de una JBG participen activamente en la junta por un periodo de dos semanas. Se estableció de esta manera con el fin de asegurar que no haya líderes o protagonistas políticos que luego se corrompan o se encuentren bajo la influencia de fuerzas externas. También da cabida a las necesidades, intereses y preocupaciones de cada miembro dentro de la zona que cubre la junta de buen gobierno.

El gobierno federal ignora las JBG, ya que son pocas y se encuentran en zonas remotas del estado; lo hace, en cualquier caso, como parte de su política de guerra contrainsurgente de baja intensidad. Algunas ONG que interactúan con ellas alegan que los cambios en la composición política de las JBG son demasiado rápidos para mantener un buen conocimiento de lo que está en progreso. Las juntas han creado sus propias leyes y las hacen cumplir, aplicando sanciones cuando considera necesario, en virtud de un sistema paralegal basado en la comunidad. Por ejemplo, han tomado una postura firme contra el tráfico de drogas y la trata de personas, que ha aumentado dramáticamente en Chiapas desde 2007 (Baronnet *et al.*, 2011).

Las JBG parecen estar teniendo éxito en el avance hacia la aplicación política, social y económica de la ideología y programa zapatistas en sus zonas limitadas de influencia. En 2006, los resultados ya podrían ser vistos, con los 600 promotores de salud, preparados en anatomía, fisiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento, sobre todo en la medicina preventiva, talleres personales y colectivos de higiene y vacunación; 500 casas comunitarias de salud, equipadas con los medicamentos esenciales y la farmacia de medicina herbal alternativa.

Asimismo, disponen de un hospital con una clínica quirúrgica, una clínica dental, un laboratorio clínico, un área de oftalmología y otro de ginecología, un laboratorio a base de hierbas, una farmacia y habitaciones hospitalarias; ocho clínicas municipales, incluyendo una con una clínica dental, un laboratorio clínico (donde se pueden

realizar análisis de orina y otras pruebas básicas y exámenes de sangre contra la malaria y la tuberculosis) y una ambulancia, además de cuatro clínicas municipales que ofrecen consultas gratuitas y, cuando pueden, también la medicina gratuita, un laboratorio a base de hierbas y alimentos alternativos; 300 curanderas de huesos, herbolarias y parteras capacitadas, que son también promotoras de la agroecología y de la ciencia veterinaria. Avances similares se han realizado en la educación y la creación de escuelas autónomas zapatistas, a las cuales también se anima a los no zapatistas a enviar a sus hijos (Baronnet *et al.*, 2011).

En cuanto a la autogestión de la logística económica, tres almacenes proveen cientos de tiendas de conveniencia de la comunidad, tanto zapatistas como no zapatistas. Hay cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías y calzado, así como talleres; cuentan con el Centro de Comercio Nuevo Amanecer, auditorios, el café "Cyber-pozol", la casa Ediciones Autónomas Rebeldes, con publicaciones propias; con un sistema autónomo de medios de comunicación, estaciones de radio regionales (que involucran a un organismo de radiodifusión a partir de las bases de apoyo zapatista) y un taller de procesamiento de video.

El principal producto agrícola comerciable en las zonas zapatistas de Chiapas es el café, y se han creado varias cooperativas para su producción y venta. Después del petróleo, el café es la segunda materia prima más comercializada en el mundo. A escala mundial, 6.7 millones de toneladas métricas de granos de café se produjo anualmente en el periodo 1998-2000, y el pronóstico en ese momento era un incremento de siete millones de toneladas métricas anuales para 2010 (Shah, 2012). Alrededor de 25 millones de pequeños productores de todo el mundo trabajan en su cultivo directo y, si sus familias y todos los trabajadores relacionados (recolección, procesamiento y comercio) se incluyen, posiblemente cientos de millones de personas dependen de este cultivo. México es un productor de café significativo, con el séptimo lugar en el mundo para 2012, según datos de la Organización Internacional del Café, de 2013.

Las condiciones climáticas y geomorfológicas de Chiapas lo convierten en el mayor productor de café del país, con 25% del total nacional. Sin embargo, sólo una pequeña parte del beneficio va a los productores; la mayor parte del costo de una bolsa de café va al

comercio de los intermediarios y al procesamiento del café, sobre todo a las grandes corporaciones transnacionales. En los últimos 20 años este fenómeno se ha incrementado rápidamente.

En 1989 se suspendieron las normas de protección del Convenio Internacional del Café. Ese mismo año, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron generosos préstamos para el desarrollo del cultivo en países donde hasta entonces no se había producido (como Vietnam), lo que ocasionó un exceso de oferta. Los precios en el mercado internacional se derrumbaron y, a pesar de aumentos temporales, se mantenían en niveles bajos hasta la actualidad. El precio promedio del café Arábica en el índice de materias primas de Nueva York fue, para el periodo 1976-1989, de 3.30 dólares por kilo. Para el lapso 1990-2005 se redujo a 2.20 dólares por kilo. Además de contar la pérdida de valor del dólar debido a la inflación, los productores vieron el ingreso de su producto reducirse en más del 50 por ciento.

Esa fue la llamada “crisis del café”. Durante el mismo periodo que las grandes corporaciones de café tuvieron un aumento notable en sus ganancias, los beneficios de la reducción del precio de la materia prima no fueron transmitidos a los consumidores, sino a sus accionistas. Por otra parte, los pequeños productores tuvieron que afrontar dificultades, especialmente en América Central. Su ingreso ya no era suficiente para cubrir el costo de producción, por lo que cientos de miles abandonaron sus tierras y emigraron a las ciudades cercanas o miles desaparecieron como emigrantes en Estados Unidos, con cientos de muertos en el desierto en el intento de cruzar la frontera.

Tras la “Guerra de Calderón” contra las drogas, iniciada en 2007 y todavía sin fin, se sabe que la mayor parte de los 27 000 desaparecidos en México son emigrantes centroamericanos, víctimas de la colusión entre los cárteles del narcotráfico, sobre todo de los Zetas, el más sanguinario, y el Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en la zona fronteriza del Sur.

Por otra parte, la caída en el precio del café ha impactado la economía local de la región, que antes fue sustentada de manera significativa a través de las exportaciones del producto. La población indígena de Chiapas fue golpeada por la crisis. Ellos fueron separados del resto de la actividad económica de México, mientras que el cultivo de café era su único ingreso real. En esta

región, los intermediarios, en 1993, estaban pagando ocho pesos por kilo de café, mientras que su precio de reventa en Europa sobrepasaba los 10 euros (150 pesos a la tasa de intercambio de 2014). Muchas personas afirman que la caída del precio del café fue el colmo para los indígenas en Chiapas. Los que no abandonaron sus plantaciones y familias para emigrar a Estados Unidos, se unieron al EZLN para participar en la revuelta del 1 de enero de 1994, el día que fue introducido el TLC de América del Norte.

Después de la revuelta, las demandas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus culturas y sus derechos colectivos, económicos y políticos, no fueron satisfechas. Su lucha se trasladó a la reconstrucción de su autonomía frente al Estado mexicano. Miles de indígenas productores de café, con la experiencia de su participación anterior en cooperativas productivas, estaban participando. Como resultado de su experiencia y de las nuevas relaciones que el EZLN creó con los movimientos internacionales de solidaridad, una idea se desarrolló: la creación de la primera cooperativa de café zapatista. El objetivo de los productores era obtener una forma alternativa a la oferta y exportación del café, lo que les permitiría poner fin a su dependencia total de los intermediarios y del mercado global impredecible. Su llamada para la creación de "otro" mercado del café, con condiciones más dignas para los productores, rápidamente recibió una respuesta por las pequeñas tiendas de café de Estados Unidos, con estructuras cooperativas y una orientación política progresista, también por los colectivos de solidaridad y las personas sin experiencia comercial anterior.

En cuanto a la estructura de las cooperativas, la asamblea general de los productores es el órgano supremo de las cooperativas, que se reúne por lo menos una vez al año y elige un nuevo consejo de administración cada tres años. En total, hay alrededor de 2 500 productores, mientras que la cantidad de café que va a las redes de solidaridad es de cientos de toneladas, dependiendo de las condiciones especiales de cada año. Las cooperativas son una parte integral del movimiento zapatista y, por lo tanto, cooperan con las estructuras políticas del movimiento, especialmente las JBG. Respetan sus decisiones, que tienen como objetivo los intereses más amplios de las estructuras y comunidades autónomas.

Las cooperativas de café zapatistas son quizás el mejor ejemplo de la evolución de las estructuras económicas alternativas y autónomas en Chiapas. Los productores no dependen del mercado local o global. Por medio de la organización colectiva y la cooperación con las redes de solidaridad, los productores reciben un precio por su producto que puede cubrir el costo de la producción y al mismo tiempo llevarles un ingreso digno, que ha aumentado en los últimos años, a pesar de la crisis económica mundial. Además, ganan acceso a las estructuras comunes y al soporte técnico.

Pero no solamente los productores se benefician. Durante el tiempo que las cooperativas desarrollen y mejoren sus funciones, contribuyen con una cierta cantidad de sus ingresos a los programas autónomos de educación, salud, y para otras estructuras sociales. Por otra parte, las iniciativas y las organizaciones que participan en las redes de solidaridad regresan una cierta cantidad de sus ingresos, por las mismas razones, a las comunidades zapatistas. De esta manera, las cooperativas de café funcionan como una fuerza impulsora del movimiento zapatista.

No obstante, las cooperativas han enfrentado dificultades notables. La construcción de una estructura organizativa eficaz que respete la orientación política horizontal y directamente democrática del movimiento zapatista, fue en un primer momento su mayor dificultad. Conscientemente negaron cualquier tipo de ayuda por parte del Estado mexicano y trataron solamente con los procesos técnicos y burocráticos de apoyo de las organizaciones de solidaridad independientes en México. Al mismo tiempo, han tratado de desarrollar algunos proyectos de infraestructura, como espacios para el almacenamiento y procesamiento del café. El obstáculo más grande, en la actualidad, son las autoridades mexicanas, que impusieron, por ejemplo, una multa a la cooperativa de café Mut-Vitz, en 2007, debido a supuestas irregularidades fiscales.

El café zapatista se distribuye al menos en 12 países europeos, a partir de una variedad de iniciativas locales, que se conectan a través de una red horizontal internacional llamada Red de Distribución de Productos Zapatistas (RedProZapa), que tiene asambleas generales dos veces al año en una ciudad europea. La característica común que los une es su solidaridad política con la lucha zapatista. La venta de café ofrece apoyo económico a las estructuras productivas en Chiapas.

Otro ejemplo importante de la autogestión en México ha sido la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en lo que queda del Lago de Texcoco, cerca de la Ciudad de México, que fue detenido por las movilizaciones importantes y radicales más otras formas de acción directa en 2002 y que habría sido totalmente destructiva del medio ambiente ya gravemente dañado del Valle de México. El FPDT fue un actor clave en la Otra Campaña del EZLN en 2006-2007, pero sufrió una terrible represión del Estado mexicano entonces bajo el mando del gobernador Enrique Peña Nieto, después de lo cual tardó varios años en recuperarse y sólo resurgió como fuerza política en 2012, ahora en alianza con el más moderado #YoSoy132, movimiento estudiantil y juvenil, para formar la convención nacional de breve duración. El FPDT se sigue oponiendo a los planes del gobierno del PRI para revivir el proyecto de un nuevo aeropuerto internacional cerca de Atenco y continúa practicando la autogestión comunal de la tierra.

LIMITACIONES DEL COOPERATIVISMO Y LA AUTOGESTIÓN ECONÓMICA COMO FORMAS DE CONTROL OBRERO EN MÉXICO

Hemos visto, a través de estos cuatro estudios de caso: Tradoc-Euzkadi, Pascual Boing, Ruta-100 y las cooperativas zapatistas de café en Chiapas, que el cooperativismo sigue muy activo en el México actual, aunque tiende a predominar la forma de autogestión puramente económica, inclinada finalmente a un uso por parte del capitalismo social, que hace puente entre lo público y lo privado para imponer precariedad y austeridad bajo el encubrimiento del mutualismo, en realidad abandonado hace tiempo, y el mito del proyecto socialista utópico histórico del cooperativismo del siglo XIX, desde la perspectiva marxista autonomista de Curcio y Roggero (2014).

En este último apartado, y también como forma de conclusión, vemos algunas de las críticas actuales sobre las limitaciones del cooperativismo como forma de control obrero en el siglo XXI y después de siete años de la peor crisis económica en la historia del capitalismo.

En los casos de Euskadi y Pascual-Boing, estas dos “empresas recuperadas”, lo que se debe recalcar es que los propios trabajadores las han convertido en cooperativas, y constituyen dos de los principales ejemplos de control obrero en México, pero con muchos problemas y limitaciones. De hecho, incluso el gobierno local socialdemócrata neoliberal de la Ciudad de México, bajo control del PRD, también ha promovido, por lo menos hasta el 1 de diciembre del año pasado, la formación y la creación de cooperativas de pequeña escala en nombre de la “economía solidaria”, aunque más bien bajo el modelo neoliberal de las micro, pequeñas y medianas empresas (PyME), muchas de las cuales, a pesar de sus orígenes “sociales”, se han convertido en empresas capitalistas, “con fines de lucro”, plenamente integradas en el mercado, a tal punto que realmente han abandonado el modelo mutualista del cooperativismo por el modelo del cooperativismo tipo Tercer Italia posfordista-neoliberal, ahora adaptado a las exigencias del neocapitalismo en su fase de crisis exacerbada:

Estas experiencias han creado un oasis disfrutando de sus propios procesos, pero a veces se enfrentan a muy grandes limitantes. Incluso si realmente no rompen con la dinámica del negocio en una escala general, estos espacios son todavía muy ricos, ya que si bien no logran realmente ser una alternativa general, son alternativas parciales para la comunidad social, y es lo social también un desafío que requiere un mayor nivel de confrontación con el fin de construir la fuerza necesaria para romper con el orden existente (Modonesi, 2014).

Otra perspectiva más radical y desde un punto de vista marxista más ortodoxo sobre el cooperativismo viene de Laura Collin:

Las cooperativas son integrales para el capitalismo, que funcionan con la lógica de la reproducción ampliada del capital, así como la producción para el mercado, por lo que sostengo que están en el núcleo del capitalismo, en lugar de la propiedad privada de los medios de producción, como afirma el marxismo (2014).

Así, las cooperativas controladas por los trabajadores hoy en día pueden ser un modelo alternativo para la supervivencia contra la prolongada crisis del neoliberalismo, pero no necesariamente proporcionan un modelo para la resistencia anticapitalista.

Obviamente, cada trabajo rescatado de la subcontratación, de la precariedad y de la informalidad, por no decir del desempleo, es una especie de victoria, aunque profundamente amarga porque el avance del trabajo capitalista o “trabajo abstracto” se basa cada vez más en la autoexplotación del trabajo vivo humano alienado (Holloway, 2011).

En México, el ejemplo de los neozapatistas del EZLN y de la Sexta es el más emblemático de la amplia utilización de las cooperativas y de la autogestión dentro de una estrategia política objetivamente anticapitalista para la autonomía del sistema de partidos políticos. Sin embargo, no es el único, ya sea en zonas rurales o entre los pueblos indígenas, demostrando que la única manera en que la autogestión económica anticapitalista puede prosperar es cuando se combina con la autonomía política o el autogobierno.

En general, la situación en México es aún más precaria que la del resto de América Latina, en términos de la construcción de un movimiento urbano-rural anticapitalista autónomo, que realmente podría ser independiente de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras formas políticas e institucionales de la mediación y la cooptación.

Todavía no ha sido posible pasar a la ofensiva, como en Venezuela, Argentina o Bolivia, y organizar la recuperación de los lugares de trabajo y de los bienes comunes cerrados, que en México también se han informalizado por un capitalismo mundial en crisis profunda y en medio de una nueva fase de acumulación primitiva, según Harvey (2010) y otros. Sin embargo, el ejemplo de la muy inteligente e innovadora lucha de la CNTE ha marcado el ritmo para la siguiente etapa de la resistencia anticapitalista. Mientras que el escenario actual está dominado por un conjunto de cooperativas autogestionadas y experimentas a pequeña escala, integradas esencialmente en el neoliberalismo o al menos sin la capacidad para romper con él.

BIBLIOGRAFÍA

Bagnasco, Arnaldo (1977), *Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano*, Bolonnia, Il Molino.

- Baronnet, Bruno *et al.* (eds.) (2011), *Luchas "muy otras": zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana/CIESAS/Unach.
- Brenner, Johanna (2014), "The Zapatistas at 20: building autonomous community", Melissa Forbis interviewed by Johanna Brenner, 23 de marzo.
- Collin, Laura (2014), "La economía solidaria es un modelo en construcción", *La Coperacha*, 4 de febrero [<http://www.lacoperacha.org.mx/economia-solidaria-laura-collin.php>], fecha de consulta: febrero de 2012.
- Cuéllar Vázquez, Angélica (2002), *La cara oculta de Ruta 100: la construcción subjetiva de la democracia, representatividad y legitimidad sindical en México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana.
- Curcio, Anna y Gigi Roggero (2014), "No Coop–Dalla logistica all'università", *Commonware*, 7 de abril [<http://commonware.org/index.php/cartografia/325-no-coop>], fecha de consulta: octubre de 2014.
- Enlace Socialista* (2014), "Una historia que va sobre ruedas; de obreros en Euzkadi a llanteros" [<http://www.enlacesocialista.org.mx/articulo/una-historia-que-va-sobre-ruedas-de-obreros-en-euzkadi-a-llanteros>], fecha de consulta: marzo de 2014.
- Harvey, David (2010), "Organización para la transición anti-capitalista", *Argumentos*, vol. 23, núm. 63, pp. 35-58.
- Holloway, John (2011), "1968 and the Crisis of Abstract Labour" [<http://www.johnholloway.com.mx/2011/07/30/1968-and-the-crisis-of-abstract-labour/>], fecha de consulta: marzo de 2014.
- Katsiaficas, George (1997), *The subversion of politics: European autonomous social movements and the decolonization of everyday life*, Nueva Jersey, Humanity Books.
- Kumar, Krishan (1995), *From post-industrial to post-modern society: new theories of the contemporary world*, Londres, Blackwell Publishing.
- La Coperacha* (2012), "Tradoc: la defensa del trabajo", 1 de mayo de 2012 [lacoperacha.org.mx/reportaje-tradoc.php], fecha de consulta: febrero de 2014.
- Legorreta, Jorge (2004) "De cocodrilos al pulpo verde, el transporte dominante de la urbe", *La Jornada*, 23 de septiembre [<http://www.jornada.unam.mx/2004/09/23/02an1cul.php?origen=cultura.php&fly=1>], fecha de consulta: marzo de 2014.
- Marx, Karl (1938 [1880]), "A Workers' Enquiry", *New International*, vol. 4, núm. 12, diciembre [<http://www.marxists.org/history/etol/newspaper/ni/vol04/no12/marx.htm>], fecha de consulta: 18 de marzo de 2014.
- Marx, Karl y Friedrich Engels (1848), *Manifiesto del Partido Comunista* [<http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm>], fecha de consulta: marzo de 2014.

- Modonesi, Massimo (2014), "La economía solidaria genera experiencias ejemplares pero no cuestionan el orden capitalista: Massimo Modonesi", *La Coperacha*, 18 de febrero [<http://www.lacoperacha.org.mx/vision-marxista-de-la-economia-solidaria.php>], fecha de consulta: febrero de 2014.
- Munck, Ronaldo (2006), *Globalization and Contestation: The New Great Counter-Movement*, Londres, Routledge Chapman & Hall.
- Notimex (2003), "La Cooperativa Pascual no está en quiebra ni se vende: Torres Cisneros", *La Jornada*, 14 abril [<http://www.jornada.unam.mx/2003/04/14/026n2eco.php>], fecha de consulta: marzo de 2014.
- Organización Internacional del Café (2012), "Coffee: total production of exporting countries crop years commencing: 2006 to 2012" [<http://www.ico.org/prices/po.htm>], fecha de consulta: octubre de 2014.
- Poniatowska, Elena (2010), "Cooperativa Pascual: 25 años", *La Jornada*, 15 de junio [<http://www.jornada.unam.mx/2010/06/15/opinion/a13a1cul>], fecha de consulta: marzo de 2014.
- Stahler-Sholk, Richard (2011), "Autonomía y economía política de resistencia en las Cañadas de Ocosingo", en Baronnet, Bruno *et al.* (eds.), *Luchas "muy otras": zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 409-445.
- Sociedad Cooperativa "Trabajadores de Pascual" (2007), "La Cooperativa Pascual y la Responsabilidad Social" [http://www.rhred.com/upload/CyT/conferencia_martes_1.pdf], fecha de consulta: marzo de 2014.
- Reforma* (1995), "Quiebra R-100 por ineficiencia", 9 de abril.
- Shah, Artika (2012), "Top 10 most traded commodities in the world", *StockMarketDigitak*, 22 de noviembre [http://www.stockmarketdigital.com/top_ten/top-10-business/top-10-most-traded-commodities-in-the-world], fecha de consulta: octubre de 2014.
- Wright, Steve (2002), *Storming Heaven: class composition and struggle in Italian Autonomist Marxism*, Londres, Pluto Books.